



Ley 21.595

**Delitos Económicos
y Ambientales**



Juan Carlos Manríquez, LLM, Profesor D° Penal, Litigación y DP Internacional, Abogado ante la Corte Penal Internacional, La Haya. Socio de CPA LEGAL.

En una columna anterior (1) dijimos que la ley 21.595, sobre delitos económicos y ambientales tiene, entre varios méritos, el de regular sistemáticamente por vez primera la pretendida protección penal del medio ambiente y sus distintos componentes, y considerar dichas comisiones como delitos contra el orden económico en las situaciones que indica para uno de los cuatro grupos de ilícitos que considera tales.

Sus autores ordenaron los ilícitos que describe la ley en cuatro grupos. Dicen: “El pasado miércoles 22 de abril la Comisión de Constitución, Legislación, Justicia y Reglamento de la Cámara de Diputados aprobó por unanimidad la idea de legislar en relación con el proyecto de ley sobre delitos económicos (Boletín 13.205-07).

El proyecto define un catálogo de delitos económicos y contempla reformas legales en cuatro aspectos básicos.

El catálogo de delitos económicos se construye mediante referencias a disposiciones del Código Penal y de la legislación especial, diferenciando cuatro categorías.

En primer término, un listado no muy extenso de delitos que tienen el carácter de económicos cualesquiera que sean las circunstancias de su comisión. A este pertenecen, por ejemplo, los delitos de la ley de mercado de valores, del decreto ley sobre libre competencia y de la ley general de bancos, así como la corrupción en el ámbito privado. En segundo lugar, un extenso listado de delitos que se consideran económicos cuando han sido cometidos por un sujeto al interior de una empresa o en beneficio de ella. De esta clase son, por ejemplo, los delitos aduaneros y medioambientales, la estafa y la administración desleal. En tercer término, un listado de delitos especiales, es decir, cometidos por funcionarios públicos u otros autores que tienen una calidad personal especial, que se consideran económicos cuando en su comisión ha intervenido un sujeto al interior de la empresa o son cometidos en su beneficio. Finalmente, son también delitos económicos la receptación o blanqueo de activos cuando recaen sobre bienes originados por delitos económicos o cuando en su comisión se cumplen las condiciones de la segunda categoría de delitos económicos.

Para todos los casos en que se requiere alguna vinculación con una empresa el proyecto dispone que debe tratarse de grandes o medianas empresas”. (2)

Para la ley, entonces, “se consideran” siempre delitos económicos aquellas conductas que han sido cometidas por un sujeto al interior de una empresa o en beneficio de ella. Y “... de esta clase son, por ejemplo, ... los delitos medioambientales”.

Se agrega que para imputar a las personas jurídicas se siguen las reglas de la ley 20.393.

En conocimiento de lo que está ocurriendo ahora mismo en Europa, y ad portas que este próximo 5 de septiembre de 2023 se inicie en Suecia el “Caso Lundin”, quizás el más atractivo de la jurisdicción doméstica continental hoy, por sus implicancias ambientales, jurisdiccionales, de derecho penal internacional y de criterios de imputación a directivos de personas jurídicas privadas por hechos ocurridos, si bien es cierto, fuera de sus fronteras, pero en explotación y “en beneficio” de una gran empresa petrolera sueca en África, es dable cuestionarse si hechos similares ocurrieran en Chile acaso la ley 21.595 podría captarlos como “delitos económicos del 2° grupo”, sin perjuicio de sus otras consecuencias concursales.

Este mes Suecia está juzgando a dos ejecutivos petroleros, acusados de complicidad en crímenes de guerra cometidos en lo que hoy es Sudán del Sur, entre 1999 y 2003.

El martes 5 de septiembre comienza el caso contra el ex director ejecutivo de Lundin Oil, Ian Lundin, y su ex vicepresidente, Alex Schneider. Se alega que entre 1999 y 2003, la compañía Lundin Oil pagó al ejército sudanés y alas milicias aliadas para asegurar las operaciones petroleras en el sur de Sudán. Los fiscales suecos dicen que una vez que la compañía encontró petróleo en un área conocida como “Bloque 5A” en 1999, estos grupos militares y milicianos lideraron numerosas operaciones violentas para tomar el control del área. Estos ataques “sistemáticos” e “indiscriminados”, según los fiscales, incluyeron bombardeos aéreos desde aviones de transporte, disparos contra civiles desde helicópteros artillados, secuestros y saqueos de civiles y quema de pueblos enteros y sus cultivos para que la gente no tuviera nada de qué vivir. Un período al que se hace referencia sombríamente como las “guerras del petróleo”. Ambos hombres niegan los cargos.

DELITOS AMBIENTALES (2A PARTE):

LA LEY 21.595 SI EL “CASO LUNDIN” OCURRIERA EN CHILE.

Por Juan Carlos Manríquez Rosales.



Han pasado más de diez años desde el inicio de las investigaciones criminales sobre Lundin Oil y dos años desde que los dos ejecutivos fueron acusados formalmente de complicidad en crímenes de guerra. La organización holandesa sin fines de lucro PAX publicó un informe detallado en 2010 llamado “Deuda no pagada” sobre lo que había sucedido y cómo los ejecutivos de Lundin podrían ser procesados, según la ley sueca.

Es inusual que las corporaciones y los individuos que las integran enfrenen consecuencias por violaciones de derechos humanos. Como tal, “muchos aplauden este caso como un raro caso de responsabilidad corporativa, y se hacen comparaciones con los juicios de Núremberg después de la Segunda Guerra Mundial” dice la prensa europea. Comentan la situación en medios expertos Mark Klamberg, profesor de Derecho Internacional Público en la Universidad de Estocolmo y Tara Van Ho, profesora titular de la Universidad de Essex, sobre lo que podemos esperar de este juicio y las implicaciones más amplias que tiene para las corporaciones y sus ejecutivos cuando se trata de su conducta en materia de derechos humanos, considerando que la protección del ambiente se considera igualmente un derecho humano fundamental.

El Caso Lundin (3) nos enfrenta a un tema y una realidad muy interesantes, desde diversos ángulos, uno de ellos es si la persona jurídica privada puede ser considerada sujeto del derecho internacional penal (4), y si su situación puede ser asimilada a un “non state agent”, (5), que no alcanza a tener la calidad de mercenario a favor de un Estado, pero que contrata agentes de un Estado o milicias privadas para proteger sus operaciones comerciales, las que terminan cometiendo crímenes contra la humanidad, polución gravey otros delitos “en beneficio de la compañía”.

Si bien ambos aspectos ya se venían discutiendo de antes a este caso en el derecho internacional y se ha abierto la posibilidad de que víctimas y personas elegibles para ser reparadas en los procesos internacionales sean organizaciones, personas no físicas, como por ejemplo las iglesias, credos y ONG entre otros, (6), de a poco la otra tendencia que hoy se va abriendo camino, es también la de asignarle responsabilidad penal a la persona jurídica en el derecho penal internacional, cuestión que en principio se negaba, cómo ha ocurrido en el Tribunal Penal Especial para el Líbano, en que se condenó por desacato a un periódico por desobediencia al revelar listas de testigos protegidos. (7), lo que configura el primer paso a la tipificación e inclusión del Ecocidio al Estatuto de Roma, como crimen contra la humanidad, también imputable a la persona jurídica. (8)

El Caso Lundin además, incorpora la posibilidad de imputar a las empresas grandes y transnacionales cuando se valen de los aparatos armados o milicias, incluso no beligerantes dentro de los Estados o en los territorios en conflicto donde instalan sus operaciones, para, por su medio o para proteger su interés comercial, o con ocasión de una práctica económica per se licita, se cometen delitos contra el ambiente y/o de lesa humanidad para proteger ese interés económico, “en beneficio de la empresa”.

Esto ¿Podría ser intrapolable a nuestros nuevos delitos económicos- ambientales, si la operación supone contratar “milicias internas” (guardias armados privados) que cometen delitos contra las personas para proteger la actividad en beneficio de la empresa? Y si además exceden en concurso los límites de emanaciones, percolados o tratamiento del RIL, en el contexto del negocio: ¿serían además considerados esos comportamientos como “delitos económicos del 2° grupo”? ¿Vale decir, aquellos delitos que siendo “nucleares” habrán de considerarse económicos por cometerse “en beneficio” de la empresa, con todas sus consecuencias?

De ser así, ¿Podrían aparecer pronto las querellas contra las empresas forestales, de agua, los vertederos o rellenos sanitarios y las compañías mineras si hay conflictos en zonas de límite urbano, en las costas o con las comunidades ancestrales, cuando los servicios de guardias contratados se exceden, pero fueron evidentemente contratados “en beneficio de la empresa”?

Guardando las proporciones de las acciones de grandes atrocidades sistemáticas que las milicias protectoras de la operación petrolera de Lundin habrían realizado, con su conocimiento, en su provecho, y al menos con su tolerancia y a razón de una sostenida contratación de sus servicios, es lícito preguntar si conforme al art. 2 numerales 8 al 15; 17 y 19 de la Ley 21.595, de ocurrir daños ambientales y también lesiones, muertes, daños a terceros o intoxicación a comunidades cercanas, la empresa forestal, minera, acuícola, agro industrial, etc. que ha sostenido esa organización y aparato de custodia será imputable igual que Lundin como autora de delitos contra los derechos humanos y por delitos económicos ambientales, en concurso con homicidio, lesiones o daños, bastando solo el dolo eventual o la pérdida de control de la fuente de riesgo permitido o por superar el riesgo tolerado, con todas las implicancias que ello lleva.

La interrogante es válida, dado lo dispuesto en el art. 7 de la ley: “Artículo 7.- Concursos. En caso de ser aplicable el artículo 75 del Código Penal o el artículo 351 del Código Procesal Penal por la concurrencia de un delito económico y de uno o más delitos de otra clase, las disposiciones del Título II de esta ley serán aplicables a todos ellos.”

DELITOS AMBIENTALES (2A PARTE):

LA LEY 21.595 SI EL “CASO LUNDIN” OCURRIERA EN CHILE.

Por Juan Carlos Manríquez Rosales.



Y en otro plano, los residuos plásticos de “fast fashion” abandonados por toneladas en el desierto del norte de Chile y en África, otra vez, han acicateado en la Unión Europea un fenómeno de protección ambiental que la industria de esa moda llama una “avalancha legislativa”. Por eso, empresas globales como Inditex y Puma ya tienen alianzas con empresas de recolección y clasificación de prendas I:CO en Alemania, Texaid en Suiza y Vestisolidale en Italia, adelantándose a una posible oleada de imputaciones por “Responsabilidad de la compañía” en tal escenario. (9) Por ende, mejorar las estrategias de evitación, prevención y los modelos efectivos de cumplimiento es una vía que las compañías deben caminar ya para una sana gestión de los riesgos legales, pues las normas penales en estos casos ya no tocarían solo al directorio, a los propietarios, a la alta gerencia, o a los ejecutivos operativos, sino incluso a los encargados de seguridad y de vinculación con el medio, por acción o por omisión.

Juan Carlos Manríquez, LLM, Profesor D° Penal, Litigación y DP Internacional, Abogado ante la Corte Penal Internacional, La Haya. Socio de CPA LEGAL.

y de vinculación con el medio, por acción o por omisión.

Juan Carlos Manríquez, LLM, Profesor D° Penal, Litigación y DP Internacional, Abogado ante la Corte Penal Internacional, La Haya. Socio de CPA LEGAL.

* <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1195119>

(1) <https://enestrado.com/dano-ambiental-delito-y-justicia-penal-competencias-limites-y-certezas-por-juan-carlos-manriquez-y-mauricio-oviedo/>

(2) <https://www.elmercurio.com/legal/movil/detalle.aspx?Id=908425&Path=/0D/DC/>

(3) <https://www.justiceinfo.net/en/120999-the-lundin-moment.html>

(4) <https://www.ibanet.org/oct-21-issue-of-dissolution>

(5) <https://www.ibanet.org/oct-21-issue-of-dissolution>

(6) ICC: Victims

<https://www.hrw.org/legacy/backgrounder/africa/icc0904/3.htm#:~:text=Who%20are%20victims%20and%20Owitnesses,harm%E2%80%9D%20can%20also%20be%20victims>

(7) <https://www.stl-tsl.org/en/the-cases/contempt-cases>

(8) <https://mbcia.cl/2021/03/14/corte-penal-internacional-estudia-considerar-el-delito-de-ecocidio-en-el-estatuto-de-roma-penalista-chileno-es-parte-del-panel-que-interviene-en-el-debate/>

(9) <https://www.crowdfunder.co.uk/p/fashion-act-now>

LAW 21.595 IF THE “LUNDIN CASE” OCCURRED IN CHILE. *

Por Juan Carlos Manríquez Rosales.



Juan Carlos Manríquez, LLM, Profesor D° Penal, Litigación y DP Internacional, Abogado ante la Corte Penal Internacional, La Haya. Socio de CPA LEGAL.

In a previous column (1) we said that Law 21,595, on economic and environmental crimes, has, among several merits, that of systematically regulating for the first time the alleged criminal protection of the environment and its different components, and considering said commissions as crimes against the economic order in the situations indicated for one of the four groups of crimes that it considers such.

Its authors ordered the illegal acts described by the law into four groups. They say: “Last Wednesday, April 22, the Constitution, Legislation, Justice and Regulations Commission of the Chamber of Deputies unanimously approved the idea of legislating in relation to the bill on economic crimes (Bulletin 13.205-07).

The project defines a catalog of economic crimes and contemplates legal reforms in four basic aspects. The catalog of economic crimes is built through references to provisions of the Penal Code and special legislation, differentiating four categories.

First of all, a not very extensive list of crimes that are economic in nature whatever the circumstances of their commission.

To this belong, for example, the crimes of the stock market law, the decree law on free competition and the general banking law, as well as corruption in the private sphere.

Secondly, an extensive list of crimes that are considered economic when they have been committed by a subject within a company or for the benefit of it. Of this class are, for example, customs and environmental crimes, fraud and unfair administration. Third, a list of special crimes, that is, committed by public officials or other perpetrators who have a special personal quality, which are considered economic when a subject within the company has intervened in their commission or are committed for their benefit. Finally, economic crimes are also the receipt or laundering of assets when they fall on assets originating from economic crimes or when the conditions of the second category of economic crimes are met in their commission.

For all cases in which some link with a company is required, the project provides that it must be large or medium-sized companies. (2)

what is now South Sudan, between 1999 and 2003.

On Tuesday, September 5, the case against former Ludin Oil CEO Ian Lundin and his former Vice President Alex Schreiber begins.

It is alleged that between 1999 and 2003, the Lundin Oil company paid the Sudanese army and allied militias to secure oil operations in southern Sudan. Swedish prosecutors say that once the company struck oil in an area known as "Block 5A" in 1999, these military and militia groups led numerous violent operations to seize control of the area.

These “systematic” and “indiscriminate” attacks, according to prosecutors, included aerial bombardments from transport planes, shooting at civilians from helicopter gunships, kidnapping and looting of civilians, and burning entire villages and their crops so that people would have no harm. what to live A period grimly referred to as the “oil wars”. Both men deny the charges.

More than ten years have passed since the start of the criminal investigations into Lundin Oil and two years since the two executives were indicted for complicity in war crimes. The Dutch non-profit organization PAX published a detailed report in 2010 called "Unpaid Debt" about what had happened and how Lundin's executives could be prosecuted, under Swedish law.

It is unusual for corporations and the individuals within them to face consequences for human rights violations. As such, "many applaud this case as a rare case of corporate liability, drawing comparisons to the Nuremberg trials after World War II," says the European press. Expert media comment on the situation Mark Klamburg, Professor of Public International Law at Stockholm University and Tara Van Ho, Senior Lecturer at the University of Essex, on what we can expect from this trial and the broader implications it has for corporations and its executives when it comes to their conduct in the area of human rights, considering that the protection of the environment is also considered a fundamental human right.

DELITOS AMBIENTALES (2A PARTE):

LA LEY 21.595 SI EL “CASO LUNDIN” OCURRIERA EN CHILE.

Por Juan Carlos Manríquez Rosales.



The Lundin Case (3) confronts us with a very interesting topic and reality, from various angles, one of which is whether the legal entity private can be considered a subject of international criminal law (4), and if their situation can be assimilated to a "non state agent", (5), which does not reach the status of a mercenary in favor of a State, but which hires agents of a State or private militias to protect its commercial operations, which end up committing crimes against humanity, serious pollution and other crimes "for the benefit of the company".

Although both aspects had already been discussed in international law before this case and the possibility has been opened for victims and people eligible for reparation in international processes to be organizations, non-physical persons, such as churches, creeds and NGOs among others, (6), little by little the other trend that is making its way today, is also to assign criminal responsibility to legal persons in international criminal law, an issue that was initially denied, as has happened in the Special Criminal Court for Lebanon, in which a newspaper was sentenced for contempt for disobedience by revealing lists of protected witnesses. (7), which configures the first step towards the classification and inclusion of Ecocide in the Rome Statute, as a crime against humanity, also attributable to the legal person. (8)

The Lundin Case also incorporates the possibility of imputing large and transnational companies when they make use of armed apparatuses or militias, even non-belligerent ones within the States or in the territories in conflict where they install their operations, for, through their means or to protect its commercial interest, or on the occasion of an economic practice per se, crimes against the environment and/or crimes against humanity are committed to protect that economic interest, "for the benefit of the company".

Could this be applicable to our new economic- environmental crimes, if the operation involves hiring "internal militias" (private armed guards) that commit crimes against people to protect the activity for the benefit of the company? And if they also exceed the limits of emissions, percolations or treatment of the RIL, in the context of the business: would these behaviors also be considered as "economic crimes of the 2th group"?

That is to say, those crimes that being "nuclear" will have to be considered economic because they are committed "for the benefit" of the company, with all its consequences?

If so, could complaints against forestry companies, water companies, landfills or sanitary landfills, and mining companies appear soon if there are conflicts in urban border areas, on the coasts, or with ancestral communities, when the guard services hired are exceeded, but were obviously hired "for the benefit of the company"?

Keeping the proportions of the actions of great systematic atrocities that the protective militias of the Lundin oil operation would have carried out, with their knowledge, for their benefit, and at least with their tolerance and due to a sustained contracting of their services, it is legitimate to ask if according to art. 2 numerals 8 to 15; 17 and 19 of Law 21,595, if environmental damage occurs and also injuries, deaths, damage to third parties or poisoning of nearby communities, the forestry, mining, aquaculture, agro- industrial company, etc. that this organization and custody apparatus has sustained will be imputable in the same way as Lundin as the perpetrator of crimes against humanity and or environmental economic crimes, in connection with homicide, injuries or damages, sufficing only the eventual fraud or loss of control of the source of risk allowed or for exceeding the tolerated risk, with all the implications that this entails.

The question is valid, given the provisions of art. 7 of the law: "Article 7.- Contests. If article 75 of the Criminal Code or article 351 of the Criminal Procedure Code is applicable for the concurrence of an economic crime and one or more crimes of another class, the provisions of Title II of this law will be applicable to all of them."

The answer seems to be that the more intense statute of Law 21.595 will always be preferred by rule of specialty, especially in terms of the subsystems and imputation criteria that it imposes in the national legal order.

And on another level, the "fast fashion" plastic waste abandoned by the ton in the desert of northern Chile and in Africa, once again, has spurred a phenomenon of environmental protection in the European Union that the industry of this fashion calls a "legislative avalanche". For this reason, global companies such as Inditex and Puma already have alliances with garment collection and sorting companies I:CO in Germany, Texaid in Switzerland and Vestisolidale in Italy, anticipating a possible wave of charges for "Company Liability" in such scenery. (9)

Then, improving avoidance and prevention strategies and effective compliance models is a path that companies must follow now for a healthy management of legal risks, since criminal regulations in these cases would no longer only affect the board of directors, the owners, senior management, or operational executives, but even those in charge of security and liaison with the environment, by action or omission.

DELITOS AMBIENTALES (2A PARTE):

LA LEY 21.595 SI EL “CASO LUNDIN” OCURRIERA EN CHILE.

Por Juan Carlos Manríquez Rosales.



* <https://www.bcn.cl/leychile/navegar?idNorma=1195119>

(1) <https://enestrado.com/dano-ambiental-delito-y-justicia-penal-competencias-limites-y-certezas-por-juan-carlos-manriquez-y-mauricio-oviedo/>

(2) <https://www.elmercurio.com/legal/movil/detalle.aspx?Id=908425&Path=/OD/DC/>

(3) <https://www.justiceinfo.net/en/120999-the-lundin-moment.html>

(4) <https://www.ibanet.org/oct-21-issue-of-dissolution>

(5) <https://www.ibanet.org/oct-21-issue-of-dissolution>

(6) ICC: Victims

<https://www.hrw.org/legacy/backgrounder/africa/icc0904/3.htm#:~:text=Who%20are%20victims%20and%20witnesses,harm%20can%20also%20be%20victims>

(7) <https://www.stl-tsl.org/en/the-cases/contempt-cases>

(8) <https://mbcia.cl/2021/03/14/corte-penal-internacional-estudia-considerar-el-delito-de-ecocidio-en-el-estatuto-de-roma-penalista-chileno-es-part-of-the-panel-that-intervenies-in-the-debate/>

(9) <https://www.crowdfunder.co.uk/p/fashion-act-now>